

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Asunto: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Víctima: CARLOS MAURICIO FERNANDEZ SANTIAGO
Agresor: MITCHEL QUINTERO PUENTE
Radicación: 760013110008-2024-00537-00
Auto No. 1468

Santiago de Cali, 4 de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resolver la consulta contra las decisiones tomadas en audiencia de incidente de No. 0297-2024 emitida por la Comisaria Tercera de Familia de Yumbo-Valle el pasado 23 de agosto que sancionó a la señora MITCHEL QUINTERO PUENTE, por desacato a la medida de protección, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 575 de 2000 remitido por el artículo 12 del decreto 652 de 2001 que en la materia debe sujetarse a las normas del artículo 52 y ss del decreto 2591 de 1991.

ANTECEDENTES RELEVANTES:

La Comisaria Tercera de Familia de Yumbo mediante resolución No. 160-2024 del 9 de mayo de 2024 ordena a MITCHEL QUINTERO PUENTE cesar inmediatamente conductas de violencia contra su expareja CARLOS MAURICIO FERNANDEZ SANTIAGO y entre otras ordenes, se ordena a las partes la asistencia a tratamiento terapéutico y psicológico para tratar emociones relacionadas con los hechos de violencia generados de la inadecuada comunicación.

El 22 de julio pasado CARLOS MAURICIO FERNANDEZ presenta ante la Comisaria solicitud de seguimiento a las medidas otorgadas, dado que la señora MITCHEL QUINTERO PUENTE, continuaba agrediéndolo verbal y psicológicamente y ejercía arbitrariamente la custodia.

El 1 de agosto pasado se admite la solicitud del incidente, ordenando valoración psicológica a las partes y trabajo social al demandante CARLOS MAURICIO FERNANDEZ SANTIAGO además de fijar fecha para la respetiva audiencia.¹

LA DECISION OBJETO DE CONSULTA

En audiencia de incidente de sanción celebrada el 23 de agosto de 2024 emitida por la Comisaria Tercera de Familia de Yumbo se dispuso que la señora MITCHEL QUINTERO PUENTE incumplió con lo ordenado en la resolución No. 160 de 9 de mayo de 2024, compromisos y órdenes dadas en aras de la protección de la integridad y seguridad de los involucrados en el trámite de violencia intrafamiliar; imponiendo como sanción, multa de dos (02) salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a \$2.600.000 que debían ser consignados dentro de los cinco días hábiles siguientes; además de ordenarle el cumplimiento del numeral tercero de la resolución No 160 del 9 de mayo de 2024, así como complementando las medidas de protección emitidas en la precitada resolución².

PROBLEMA JURIDICO

¿Se cumplen los parámetros constitucionales, legales, sustanciales y procedimentales dentro del presente incidente para confirmar la sanción impuesta por la Comisaria Tercera de Familia de Yumbo el día 23 de agosto de 2024, en razón al incumplimiento de lo ordenado en la resolución No 160 del 9 de mayo de 2024?

El despacho estima que la respuesta al problema jurídico es positiva, conforme a las siguientes.

CONSIDERACIONES

Siendo este despacho competente para resolver sobre la consulta a la Resolución del 23 de agosto de 2024 emitida por la Comisaría Tercera de Familia de Yumbo, conforme lo dispone la norma citada en precedencia, y teniendo en cuenta que la finalidad del grado de consulta es la revisión oficiosa de la decisión adoptada por la autoridad administrativa para verificar si se cumplió el trámite debido, se respetaron las garantías constitucionales y legales, el derecho de defensa dentro de la anterior actuación.

La Ley 575 de 2000, que modificó la 294 de 1996, en desarrollo del mandato constitucional contenido en el inciso 5º del artículo 42 de la Carta Política, estableció

¹ Folio 65 archivo 003

² Folio 87 archivo 003

que las relaciones familiares deben basarse en el respeto de los integrantes de la unidad familiar, por lo que consagró que toda forma de violencia debe ser sancionada a efecto de asegurar a esta su armonía y unidad, y, a efecto de prevenir, conjurar y castigar toda forma de violencia intrafamiliar, el artículo 2º de la primera Ley relacionó las medidas de protección que el funcionario del conocimiento podía adoptar en su caso, y su artículo 4º las sanciones en caso de desacato, concretamente la imposición de multa entre dos y diez salarios mínimos legales mensuales convertibles en arresto, que deberán consignarse dentro de los cinco días siguientes a su imposición; a su turno el artículo 17 de la Ley 294 de 1996 modificado por el artículo 11 de la Ley 575 de 2000 señala que “...*Las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se impondrán en audiencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10 días siguientes a su solicitud, luego de haberse practicado las pruebas pertinentes y oídos los descargos de la parte acusada*”. El artículo 12 del Decreto 652 del año 2001 señala que “*De conformidad con el artículo 11 de la Ley 575 de 2000, el trámite de las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se realizará en lo no escrito con sujeción a las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en sus artículos 52 y siguientes del Capítulo V de Sanciones*”

Así mismo dentro del marco normativo internacional con el ánimo de garantizar a todos los miembros de la familia la unidad como núcleo fundamental de la sociedad y erradicación todas las formas de violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia de género se han determinado en la Declaración Sobre La Eliminación De La Discriminación De La Mujer (CEDAW 1981), la Declaración Sobre La Eliminación De La Violencia En Contra De La Mujer (1993); y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) los derechos de sus integrantes; como la prohibición De todo tipo de discriminación (Convención de Belém do Pará (1995), normativa acogida por nuestro estado colombiano en el artículo 93 y reglamentado el artículo 42 constitucional con la Ley 294 de 1996 posteriormente reglamentada con la ley 575 de 2000.

Análisis del Caso.

Con el fin de establecer si la providencia consultada se encuentra o no ajustada a derecho, se procese a revisar el cumplimiento de las etapas dentro del trámite y la garantía de los derechos de las partes. Es así que, la demostración de los supuestos de hecho aducidos, solo es posible con apoyo de las pruebas legales y oportunamente arrojadas al presente trámite y en este caso, las pruebas deben estar dirigidas a demostrar que efectivamente la señora MITCHEL QUINTERO PUENTE incumplió la medida de protección definitiva que le fue impuesta en Resolución de fecha 9 de mayo de 2024 que le ordenó cesar actos de violencia contra el demandante y además asistir a tratamiento terapéutico con psicología en

entidad pública o privada, para gestionar sus emociones, relacionados a hechos de violencia intrafamiliar generados por la inadecuada comunicación con su expareja.³

CARLOS MAURICIO FERNANDEZ SANTIAGO presentó solicitud de seguimiento de las medidas impuestas por el incumplimiento de la demandada,⁴ por lo que admitido el incidente y ordenadas las pruebas, resultan relevantes para la verificación del incumplimiento de las ordenes emitidas por la Comisaria y que sirvieron de soporte a la decisión adoptada, observado que de la denuncia presentada el 25 de julio de 2024, se indica que *“él accionado no continuado con las amenazas”*, la somera enunciación de *“entrevistas con el equipo psicosocial”* a las partes, que no valora su contenido con argumentos que permitan establecer el cumplimiento o no de la medida preventiva; seguidamente la autoridad administrativa aduce: *“se pudo comprobar a través de las pruebas aportadas dentro del expediente No. 94.537.318-VIF, que la señora MICHEL QUINTERO PUENTE, continuó con actos de violencia psicológica y verbal por medio digitales posteriores a la Resolución No. 160 del 09 de mayo del 2024...”* haciendo referencia a pruebas, sin determinar cada una de ellas y darle el valor suasorio respectivo, bajo el tamiz de la sana crítica, como tampoco se analizan los medios digitales a los que hace referencia sirvieron de instrumento para continuar con la violencia psicológica y verbal, no se determinan, formas, tiempo y condiciones en las cuales se desarrolló tal violencia para concluir que se había desacatado la orden administrativa y finalmente establecer que los actos eran derivados *“según las manifestaciones hechas por el señor CARLOS MAURICIO FERNANDEZ SANTIAGO”* por la falta de contacto con su hija; concluyendo este despacho en la inadecuada valoración probatorio por parte de la autoridad administrativa, donde meramente se enuncian las pruebas sin otorgar valor a cada una de ellas y relacionarlas para establecer la certeza de los hechos, no daría lugar a imponer la sanción consultada.

No obstante, la demandada MICHEL QUINTERO PUENTE a lo largo de trámite no acreditó asistir al tratamiento terapéutico y psicológico para la adecuada comunicación con el demandante, con la correspondiente constancia o certificación de la respectiva entidad respectiva, hecho que sirvió como sustento final a la Comisaria para imponer la sanción; solo este motivo es el sustento jurídico válido de la sanción, dado que la reiteración en la violencia verbal y psicológica no se encuentra debidamente acreditada.

Así, tratándose de un incumplimiento por primera vez, fue adecuado la sanción mínima impuesta por la Comisaria de conformidad con lo dispuesto en el canon 4 de la Ley 575 de 2000, garantizando de esta forma el debido proceso, enterando debidamente a la sancionada del trámite, permitiéndole contradecir lo denunciado

³ Folio 35 al 45 archivo 003

⁴ Folio 49 archivo 003

por el demandante en los respectivos descargos, decretar, presentar pruebas, e incluso presentar apelación a la sanción que originó el presente trámite, que aunque improcedente y erróneamente informada de la remisión a este despacho para “homologación” recibió respuesta de la Comisaria en su oportunidad.

Concluye el despacho que se cumplieron a cabalidad los parámetros legales para imponer la sanción a MITCHEL QUINTERO PUENTE en los términos señalados por la autoridad administrativa remitente, lo que impone a este despacho su confirmación.

En mérito expuesto, el Juzgado Octavo de Familia del Circuito de Cali, administrando Justicia, en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución proferida el 23 de agosto de 2024- por la Comisaria Tercera de Familia de Yumbo dentro del trámite de Incidente de Sanción No. 0297-2024 por incumplimiento a la medida de protección instaurada por el señor CARLOS MAURICIO FERNANDEZ SANTIAGO contra MICHEL QUINTERO PUENTE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese esta providencia por el medio más expedito a las partes y personalmente al defensor de familia y a la delegada de la procuraduría para asuntos de familia.

TERCERO: Cumplido lo anterior, devuélvase la actuación a la oficina de origen, previa cancelación de su radicación.

NOTIFIQUE Y CÚMPLASE

Firmado Por:
Harold Mejía Jimenez
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 008 Oral
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b0eee2b703ff5f9d838d09e2305177340f78b6e77d1e03d07f4956dc72600b11**

Documento generado en 04/09/2024 04:23:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>